



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3
CPE 519/2019/TO2/1

///nos Aires, 23 de diciembre de 2020.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en el presente **“INCIDENTE DE ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN PREVISTO EN LA LEY 27.541”** formado en la causa Nro. 2879 (CPE 519/2019/TO2), caratulada: **“ANCERS S.A. – VÁZQUEZ, ÁNGEL S/ INFRACCIÓN LEY 24.769”** del registro de este Tribunal, seguida a **Ángel VÁZQUEZ**, titular del DNI Nro. 4.078.150, argentino, nacido el 31 de marzo de 1932 en esta ciudad, hijo de Andrés Vázquez y de María Carmen Pérez, casado, de ocupación Presidente de la firma ANCERS S.A., con domicilio en la calle Navarro 4647, planta baja “1” de esta ciudad, y **ANCERS S.A.**, CUIT N° 30-557655-8, con domicilio fiscal en la calle Oliden 1870 de esta ciudad, asistidos por la Dra. Silvia Corina BONIFACE (T° 7 F° 718 CPACF). Interviene como representante del Ministerio Público Fiscal la **Dra. Claudia BARBIERI**, Auxiliar Fiscal de la Fiscalía General Nro. 2 del fuero y por la parte querellante AFIP el **Dr. Leonardo Martín Adolfo TORRES** (T° 48 F° 502 CPACF), letrado de la Sección “A” de la División Penal, Dirección de Contencioso de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP-DGI.

RESULTANDO:

I.- Que, cabe recordar que conforme los requerimientos de elevación a juicio obrantes a fs. 1055/1065 y fs. 1394/1401, se imputa a **Ángel VAZQUEZ** y a la firma **ANCERS S.A.** el haber omitido depositar en término los aportes retenidos a sus empleados



48508195242 / 5 / 04444202012231 / 4418340

en relación de dependencia en concepto de aportes con destino al Régimen Nacional de la Seguridad Social y Obras Sociales, a los que se encontraba obligada la citada empresa, de acuerdo al siguiente detalle:

PERIODO	Seg. Social	Obra social	Total
01/2014	\$233.903,64	\$40.438,31	\$274.341,95
02/2014	\$168.126,73	\$28.833,64	\$196.960,37
05/2014	\$99.000,00	\$31.422,22	\$130.422,22
06/2014	\$161.841,30	\$32.899,64	\$194.740,94
07/2014	\$167.623,23	\$33.773,60	\$201.396,83
08/2014	\$312.655,30	\$53.188,87	\$365.844,17
09/2014	\$208.831,66	\$35.517,44	\$244.349,10
10/2014	\$188.734,90	\$38.890,21	\$227.625,11
11/2014	\$214.062,17	\$36.373,70	\$250.435,87
12/2014	\$205.674,89	\$34.996,60	\$240.641,49
05/2016	\$159.718,70	\$26.574,73	\$186.293,43

Las referidas conductas fueron calificadas bajo las previsiones del artículo 9 de la ley 24.769 y atribuidas a **Ángel VÁZQUEZ** en calidad de autor -art. 45 Código Penal- y a **ANCERS S.A.** en los términos del art. 14, segundo párrafo de la mencionada ley.

II.- Que, a fs. 1/13 y 35/67 la defensa de **Ángel VÁZQUEZ** y **ANCERS S.A.** solicitó la suspensión del proceso en los términos del art. 10 de la ley N° 27.541 (según ley N° 27.562) toda vez que la firma se acogió a la moratoria dispuesta por la citada ley.

III.- Corrida que fue la vista a la parte querellante, representada por el Dr. Leonardo TORRES, sostuvo que no corresponde dictar la suspensión de la acción penal por entender que “...en el art. 8vo, 2do párrafo, de la ley 27.541 (mod. Ley



435081952#2 / 5 / 04444202012231 / 4418340



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3
CPE 519/2019/TO2/1

27.562)... la exclusión de los aportes al Régimen de Obra Social, allí instituida, es una decisión tomada por el legislador... en su 6to párrafo se establece lo siguiente: ‘...Invítase a las obras sociales... a establecer programas de regularización de deudas en condiciones similares a las previstas en el presente capítulo...’... Este párrafo no puede ser interpretado en otro sentido que, **existiendo una deuda relativa a los aportes al Régimen de Obra Social, debe la contribuyente imputada acreditar que pagó directamente a la Obra Social** o acreditar debidamente que ha acordado con dicha entidad un plan de pagos en similares condiciones a los que establece la Ley 27.541 (mod. 27.562)... Si bien es cierto que ANCERS SA se ha acogido al Plan de Facilidades de Pago N807016, incluyendo en el mismo la deuda emergente por los aportes previsionales destinados al Régimen Nacional de la Seguridad Social... ha dejado impago el concepto relativo a aportes al Régimen de Obra Social...” (conf. fs. 69/70 lo destacado me pertenece).

IV.- Que, luego de ello, la defensa aportó comprobantes de pagos los cuales acreditan que fueron abonados los montos de los aportes adeudados en concepto de Obra Social (conf. fs. 73/93).

V.- Corrida que fue nuevamente la vista a la parte querellante, el Dr. Leonardo TORRES volvió a sostener que no corresponde hacer lugar a la suspensión de la acción penal, pero en esta oportunidad manifestó que “...la acreditación por parte de la defensa de la cancelación de la deuda por Aportes con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales; cuya fecha de pago data del



43508195242 / 75 / 04444202012231 / 4413340

25/11/2020. Y así pues, previo a sentar postura, esta querella no puede desconocer que tales pagos no han sido realizados en los términos de la Ley 27541. Es que, conforme la norma citada, se excluye la posibilidad de acogimiento por tales conceptos, situación también receptada por la RG N° 4816/2020 (AFIP) en su art. 3 inc. b)...” (conf. 99/100).

VI.- Que, corrido el traslado al Ministerio Público Fiscal, la Sra. Auxiliar Fiscal solicitó una audiencia a efectos de definir las cuestiones planteadas con la presencia de la totalidad de las partes (conf. fs. 102).

VII.- Que en la audiencia citada a los fines solicitados, la cual se llevó a cabo de forma remota a través de la plataforma digital “Zoom”, se otorgó la palabra en primer término a la **Sra. Auxiliar Fiscal** quien manifestó que se la ha corrido traslado al Ministerio Público Fiscal por los hechos que figuran en el requerimiento de elevación a juicio, que analizó las presentaciones de la defensa, las contestaciones de la parte querellante y compulsó los pagos realizados que surgen de los diferentes comprobantes, los cuales se encuentran digitalizados en la plataforma pertinente. En virtud de ello, advirtió que en un primer momento, cuando la defensa solicitó que se aplique las condiciones de la ley 27.541 en orden a los períodos omitidos que se componían, por una parte por recursos de la seguridad social y por la otra, por recursos de la obra social, la querella- AFIP- presentó un escrito en el cual sostuvo que aceptaba el cumplimiento en todo lo concerniente a las cuestiones de la seguridad social como lo especifica la ley, pero que con



435081952427/5/04444202012231/4413340



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3
CPE 519/2019/TO2/1

relación a los aportes de la obra social no se encontraba satisfecha por existir deuda impaga y que no se regularizó plan en ese concepto. En esa oportunidad, la querella adujo que la ley no contemplaba este concepto y que se invitaba a las obras sociales a que produzcan un plan similar. Así, sostuvo que lo que se pretende con leyes como la 27.541, la ley 27.563 y las anteriores inclusive, se relaciona con que se satisfagan los montos que son adeudados, siendo ése el origen y el fundamento de dichas leyes. Señaló que más allá de la situación de crisis actualmente atravesada, lo cierto es que se privilegia el erario público, que ingrese la mayor cantidad de dinero a la Hacienda Pública. Con posterioridad al escrito de la querella, la defensa realizó una serie de pagos que acreditó con los certificados que se encuentran agregados al expediente y que son pagos correspondientes a las obras sociales, las cuales se encontraban impagas dentro de los períodos por los cuales las presentes actuaciones fueron elevadas a juicio. En virtud de ello, ante el segundo traslado efectuado a la parte querellante, ésta reconoció que los períodos adeudados se encontraban regularizados mediante un plan de facilidades de pago de la ley 27.562 en relación a la seguridad social y también reconoció que se encontraban cancelados estos períodos adeudados por obra social, pero manifestó que como la fecha de los pagos era posterior a la legislación vigente por ello se oponía a que se dé curso por esta vía. Así, expresó que tratándose de un mismo hecho el cual tiene dos partes, uno de seguridad social y otro de obras sociales, la ley 27.541 sólo refiere a planes de la seguridad social, y si bien



435081952427/5/04444202012231/4413340

específicamente no pueda encausarse la totalidad de los montos por esta ley de amnistía, entendió existen otras posibilidades para evaluar la situación que se presenta sin tener que recurrir a un debate oral. En ese orden, sostuvo que se encuentra cubierto el régimen de pagos establecido por la ley 27.541 relativos al régimen de seguridad social y por otro lado se encuentran saldados los aportes del régimen de obra social, y si bien no se puede resolver el caso por las disposiciones de aquella normativa, se encuentra vigente y resulta de aplicación lo previsto en el artículo 59 inciso 6° del C.P. el cual contempla las posibilidades de extinción de la acción, ya sea por conciliación o reparación integral del perjuicio. Sostuvo que para el Ministerio Público Fiscal el perjuicio se encuentra integralmente reparado siempre y cuando se cumpla el plan de pago, las condiciones mensuales y la forma en que se ha acogido al plan, destacando que ante una falta de pago de una de las cuotas inmediatamente el expediente debería continuar, exigiendo el cumplimiento certero. Que por esa vía podemos tener el expediente por el acogimiento a la citada ley, esperando que se cumplan los pagos, y una vez que eso suceda se podrá extinguir la causa. En relación a las obras sociales, entendió que al haber abonado la totalidad del monto, la Fiscalía tenía por reparado integralmente el perjuicio pudiendo darle curso a la vía del art. 59 inc. 6 del C.P.

Posteriormente, corrido el traslado a la **parte querellante AFIP** respecto del planteo efectuado por la Sra. Auxiliar Fiscal, en cuanto a encarrilar el planteo bajo las previsiones del art. 59 inc.



435081952427/5/04444202012231/4413340



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3
CPE 519/2019/TO2/1

6to CP, el Dr. TORRES manifestó que como representante de la AFIP se oponía a la aplicación del art. 59 inc. 6 del CP bajo el entendimiento que no hay una reparación integral de la situación dado que la parte previsional de la deuda objeto de las presentes actuaciones se encuentra en un plan de pagos y se preguntó qué ocurriría, al tratarse de una extinción de la acción, si el contribuyente dejaba de pagar, cómo se volvería para atrás. En esa dirección, entendió que no resulta aplicable el instituto aludido a esta situación, ratificando lo expresado en las contestaciones de las vistas conferidas oportunamente.

Que, en la audiencia aludida, la Sra. Presidente hizo saber que si bien no quedó mencionado en el dictamen fiscal, en el trámite de reparación integral del art. 59 inc. 6º del CP, de llegar a proceder, se suspende la acción penal hasta tanto se finalice de pagar el plan de pagos, los términos de la prescripción quedarían suspendidos, y de no abonarse el mismo se retoma el juicio en el estado en el que se encontraba previamente.

A continuación, concedida la palabra nuevamente al **Dr. TORRES** manifestó que la ley penal tributaria no solamente perseguía, en este caso, el cobro de los tributos no pagados sino que también tiene un alcance mayor que tiene que ver con la finalidad de política criminal en relación al cumplimiento de los tributos. En este caso, ha sido reiterada la falta de pago de los aportes por parte de ANCERS S.A.

Que, por su parte, la **defensa del imputado Ángel VÁZQUEZ y ANCERS S.A.**, la Dra. Silvia Corina **BONIFACE**



435081952427757044420201223174413340

señaló que su asistido se compromete a cumplir la moratoria. Manifestó que si bien la empresa tuvo dificultades económicas como la mayoría de las pymes de la Argentina, esta oportunidad de moratoria resulta muy importante para ayudar a las pymes para evitar que la crisis se siga agudizando. Por ello, frente al compromiso y sabiendo que es sólo una suspensión que su cliente ha comprendiendo sus alcances, solicitó la suspensión de la causa con la condición de que ante el atraso de una cuota se reanude el procedimiento. Ello, sabiendo que la ley no solo quiere castigar sino busca la reparación del perjuicio, el cual se verifica en el presente caso con el cumplimiento de ANCERS, por lo que reiteró la solicitud de suspensión.

Preguntado por Presidencia al imputado **Ángel Vázquez** si comprendía el alcance de la audiencia, los términos planteados por la Sra. Auxiliar Fiscal en relación a la reparación integral en los términos del art. 59 inc. 6º del CP, manifestó que sí y expresó que los motivos que causaron el inconveniente con los pagos mencionados tienen su origen en una crisis que viene atravesando desde hace más de 20 años. Manifestó que privilegió la continuidad de su empresa que tiene más de 100 personas trabajando, la cual cumplió 60 años de actividad, y que ha sido un enorme sacrificio por los cambios económicos que se producen en el país.

Que, a su vez, la parte querellante, el **Dr. TORRES** puso de resalto que para dicha parte el artículo 59 inc. 6 CP no se encuentra operativo por la reforma y quería dejarlo asentado. Preguntado por



4350819524275/0444202012231/4413340



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3
CPE 519/2019/TO2/1

Presidencia respecto si tenía presente la cantidad de cuotas del plan de autos, el Dr. Torres manifestó que del sistema surgía que eran 60 cuotas.

Seguidamente, el imputado **Ángel VAZQUEZ** manifestó que en el día de la fecha recibió por parte del Banco que la comunicación respecto a que en relación a los planes, ya se han hecho cobranzas y que han tomado todos los recaudos para cumplir las fechas correctamente y que asumía con responsabilidad esta posibilidad otorgada por el Gobierno de poner sus cuentas al día.

Finalmente, la Sra. Defensora **Dra. BONIFACE** agregó que este gobierno ha facilitado a las pymes poder acogerse a la ley para evitar que la crisis se agudice aún más, que haya más desempleo y más hambre, por eso solicitó a la querella que contemple esta situación, que ya ha sido contemplada por el gobierno y aceptada por las distintas cámaras industriales, y el compromiso de su asistido al cumplimiento, y si bien hay plazo hasta el 26 para el cumplimiento de la moratoria ya se encuentran pagándola.

Y CONSIDERANDO:

VIII.- Ahora bien, oídas las partes en la audiencia celebrada, en primer lugar, debe destacarse que la ley 27.147 modificó el artículo 59 del C.P., introduciendo el inciso 6° que establece como causal de extinción de la acción penal la reparación integral del perjuicio y de allí, una forma alternativa de solución de los conflictos penales.

A su vez, de los fundamentos del proyecto de aquella ley surge que el objetivo de la ley de reforma del Código Penal es “en



43508195242775/04444202012231/4418340

materia de extinción y régimen del ejercicio de las acciones penales, tendiente a armonizar las prescripciones de dicho Código de fondo a las reformas introducidas con motivo de la aprobación del CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN dispuesta por Ley N° 27.063”.

Así fue señalado por el miembro informante del proyecto de reforma del artículo 59 bajo análisis -el Senador Urtubey-, quien manifestó que *“Las provincias argentinas hacen sus códigos y empezaron a admitir que los fiscales podían dejar de lado la acción cuando se producían situaciones de reparación, conciliación o el caso de principio de oportunidad. ¿Qué hicimos nosotros? Para zanjar esta discusión... dijimos: pongamos en el Código Penal esta posibilidad de extinción de la acción, para que quede claramente en el Código Penal sancionado para todo el país, como código de fondo, que esa posibilidad de disponer de la acción exista. Por supuesto que en las condiciones que cada ordenamiento procesal penal de la provincia lo disponga. Simplemente, ha quedado conciliada esta diferencia en cuanto a si tenía que estar en el código de fondo; lo hemos puesto allí”* (conf. Cámara de Senadores de la Nación, Período 133º, 4ª reunión, 3ª sesión ordinaria, 27 de mayo de 2015, versión taquigráfica, p. 103, exposición del Senador Urtubey).

Asimismo, mediante Resolución Nro. 2/2019 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal se resolvió disponer la implementación de los artículos 19, 21, 22 y 34 del CPPF –entre otros- para todos los



435081952427/5/04444202012231/4413340



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3
CPE 519/2019/TO2/1

Tribunales con competencia en materia penal de todas las jurisdicciones federales del territorio nacional.

En esa dirección, debe resaltarse el art. 22 CPPF el cual se prevé que *“los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social.”*

Atento a que la reforma introducida por la ley 27.063 no se encuentra vigente y no aporta reglas concretas para la aplicación del instituto, la procedencia de la reparación integral como forma de extinción de la acción debe analizarse teniendo en consideración las particularidades de cada caso en concreto.

En este sentido, conforme se expresara en el acápite precedente, el presente caso se trata de un proceso por infracción al art. 9 de la ley 24.769 cuyo bien jurídico consiste en un interés macroeconómico y social, la Hacienda Pública. Por ello, la reparación integral del perjuicio, como causal de extinción de la acción penal, debe ser lo más amplia posible en relación a la víctima, atento la característica que exige la norma: que la reparación resulte “integral”. Ello, en el entendimiento de que la reparación del daño causado al bien jurídico protegido en las presentes actuaciones resulta una demanda concreta de toda la sociedad.

Dicha causal de extinción ha sido traída a consideración de este Tribunal en virtud de un acuerdo entre la defensa y la



435081952427/5/04444202012231/4413340

representante el Ministerio Público Fiscal y por ello, debe ser considerada a la luz de las enunciaciones efectuadas por los actores involucrados en el proceso directamente interesados en la reparación del perjuicio causado en el hecho objeto de las presentes actuaciones.

En ese sentido, y conforme lo esbozara la defensa y la representante del Ministerio Público Fiscal en oportunidad de la audiencia celebrada, se desprende de las presentes actuaciones que los imputados **Ángel VÁZQUEZ y ANCERS S.A.** han abonado la totalidad del monto adeudado a la AFIP en concepto de aportes con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales y a su vez, se encuentran cumpliendo un plan de facilidades en lo que respecta a la deuda generada en concepto de aportes con destino al Régimen Nacional de la Seguridad Social.

Así, y conforme la argumentación introducida por la Sra. Fiscal Auxiliar en su condición de titular de la acción penal, quien manifestó que el Sr. Fiscal General Subrogante a cargo de la Fiscalía de Juicio que representa reconoce la operatividad del mecanismo traído a estudio, prestó su consentimiento para su aplicación en relación a los aportes con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales, por entender que al haber sido abonado la totalidad del monto, puede tenerse por reparado integralmente el perjuicio en los términos del art. 59 inc. 6 del C.P. A su vez, y en lo que respecta a los aportes con destino al Régimen Nacional de Seguridad Social, el mismo se encuentra cubierto mediante un plan de facilidades, pudiendo suspenderse la acción



435081952427/5/04444202012231/4413340



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3
CPE 519/2019/TO2/1

penal, bajo la condición de cumplir con el mismo y sus condiciones mensuales y que, ante la falta de pago, se deberá reanudar el respectivo juicio.

IX- Que, en esa dirección, la propuesta traída a consideración se presenta como una solución alternativa de conflicto respetuosa de las garantías constitucionales del imputado, siendo la que mejor se adecúa al restablecimiento de la armonía entre los protagonistas del conflicto. Ello, atento a que el acuerdo ha sido celebrado sin vicios en el consentimiento y considerando que la oposición de la parte querellante, en primer lugar, se fundó en el hecho de que no correspondía suspender la acción penal por encontrarse impagos los aportes con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales. Una vez abonados los mismos, reconoció el pago pero se opuso igualmente por entender que dicha cancelación no ocurrió con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.541 y que dicha norma excluye la posibilidad de acogimiento por tales conceptos. Finalmente, en la audiencia celebrada y consultada por la posibilidad de encarrilar el planteo en los términos del art. 59 inc. 6 del C.P. se opuso bajo el entendimiento de que el instituto no se encuentra operativo y que el régimen penal tributario posee una finalidad político criminal con relación al cumplimiento de los tributos.

De lo expuesto se colige que, aceptar la imposibilidad de aplicar el instituto previsto en el art. 59 inc. 6 del C.P., con la mera invocación de la falta de operatividad y la invocación de la finalidad político criminal del régimen penal tributario constituyen



43508195242775/04444202012231/4418340

argumentos incongruentes y confusos para el contribuyente. Aunado a ello, y en el caso concreto ocurre, cuando la oposición de la víctima (querellante) se sostiene en argumentos que descuidan la pretensión recaudatoria fiscal que el ofrecimiento trae aparejado y sin perjuicio que ello no implica la renuncia de acciones de cobro, ya que la deuda de aportes con destino al Régimen de la Seguridad Social están siendo abonados mediante un plan de facilidades de pago y la deuda de aportes con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales fue cancelada en su totalidad.

En orden a la operatividad de dicha norma se ha sostenido que “...deberá analizarse en cada caso concreto, de acuerdo a los principios constitucionales que rigen la actuación de la justicia, la procedencia de la extinción de la acción penal, pero nunca omitirse la aplicación de una ley vigente bajo el amparo de la suspensión de la ley procesal...” (Sala IV CFCP causa N° 25020/2015/TO1/CFC1 caratulados “VILLALOBOS, GABRIELA PAOLA Y OTRO S/ DEFRAUDACIÓN” del 29/08/2017) y que “...las causales extintivas de la acción penal previstas en el inciso 6 del artículo 59 del C.P. resultan plenamente operativas y aplicables aun cuando no se haya previsto una regulación especial tendiente a su aplicación en el marco procesal...” (Sala IV CFCP 5471/2011/TO1/CFC3 caratulada “GUARINO, Gustavo Adrián s/estafa” del 1/10/2019).

X.- Que, a su vez, debe destacarse que la opinión del Ministerio Público Fiscal como titular de la acción penal (art. 120 C.N.) en torno a la operatividad del instituto resulta esencial para el



435081952427/5/04444202012231/4413340



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3
CPE 519/2019/TO2/1

análisis del caso en particular conforme el interés lesionado por el hecho. Ello, en virtud que la reparación del daño causado al bien jurídico protegido es una demanda de toda la sociedad y dicha reparación se concreta en beneficio de ésta a través de la representación aludida.

En ese orden, no se desconoce la evidente relevancia de la opinión y voluntad del particular damnificado y/o víctima del comportamiento pesquisado, pero debe también examinarse el resguardo de los intereses generales que se ven afectados en la comisión de cualquier delito.

Cabe agregar, en el sentido antes indicado, que como lo ha marcado la Corte Suprema de Justicia, frente a dos posibles interpretaciones en juego, el principio *pro homine* obliga a adoptar a aquella que amplíe en mayor medida los derechos individuales, razón por la cual no resulta comprensible la postura de la querella en cuanto argumenta una inoperatividad legal al caso. Al respecto, no puede dejar de soslayarse que la interpretación judicial está condicionada a los principios establecidos en la Constitución Nacional, los cuales obligan al Tribunal a optar siempre por la interpretación de las normas que resulte más favorable al imputado.

XI.- Ahora bien, corresponde determinar con precisión en los casos de la infracción del artículo 9 de la 24.769 la cuantía y extensión del daño que provoca esta conducta.

En este sentido, debe precisarse qué conceptos deben ser alcanzados bajo el supuesto de “reparación integral del daño”; si se trata únicamente de restituir la situación a su estado previo,



4350819524275/0444202012231/4413340

teniendo en cuenta los efectos económicos que la maniobra enrostrada ha generado.

En el caso, el concepto de reparación integral está ligado por una parte al Derecho Civil y por la otra al marco de las reparaciones impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 1740, al referirse a la reparación plena, establece que la misma “... *consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. La víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea parcial o totalmente, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en dinero...*”.

Por su parte, la CIDH, ha señalado que “...*las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial...*”

En conclusión, lo cierto es que siempre que se habla de reparación se evalúa en primer lugar la posibilidad de restituir ese estado o situación al momento anterior.

De este modo, la suma no ingresada para el caso cobra relevancia como un parámetro importante a la hora de cuantificar el daño ocasionado por la conducta penalmente típica a la luz de lo previsto en art. 9 de la ley 24.769. Nótese que otros regímenes prevén el pago como causal de extinción de la acción (art. 16 de la



43508195242 / 5 / 04444202012231 / 4413340



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3
CPE 519/2019/TO2/1

ley 24.769 y art. 10 de la ley 27.541 –entre otros-), lo que marca en definitiva, que el pago de la suma omitida, podría dar lugar a la concurrencia de la causal de extinción de la acción penal.

XII.- Ahora bien, en el caso concreto, el imputado **Ángel VÁZQUEZ** y la firma **ANCERS S.A.** ofrecieron pagar el total de la pretensión fiscal que surge de los requerimientos de elevación a juicio, ello mediante el acogimiento a un plan de facilidades de pago en relación a la deuda respecto a los montos adeudados con destino al Régimen Nacional de la Seguridad Social y abonando la totalidad de la suma adeudada respecto a los montos con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales.

En consecuencia, una vez abonada la totalidad del monto, se encontraría reparado en forma integral el perjuicio económico derivado de los hechos por los cuales mediaran requerimientos de elevación a juicio, más teniendo en cuenta el contexto económico social que ha propendido a la sanción de las leyes de blanqueo y moratoria, las cuales establecen también como forma de salir de un proceso con el pago, lo que pondría en evidenciaría parte del carácter recaudatorio de la norma, y si a ello se le suma las circunstancias críticas derivadas de la situación epidemiológica actual, fortalece el criterio de atender a la aplicación razonable del mecanismo extintivo de la acción penal por la reparación integral.

En el caso, la solución propuesta por el Ministerio Público Fiscal y la defensa confluye a reparar el daño causado y para la víctima (AFIP) a la recuperación de fondos destinados al financiamiento de la Seguridad Social. Por ello considero que, aún



43508195242775/04444202012231/4413340

con la oposición de la querella, la alternativa encarrilada en la audiencia por la representante el Ministerio Público Fiscal y la defensa conlleva a la convicción jurisdiccional de validar la solución propuesta.

En esa dirección, cabe señalar que “...*la reparación no debe ser ejemplificadora sino que debe resolver el conflicto, generando entre las partes una solución, que puede ser alcanzada de distintas formas pero siempre con miras de reducir el poder punitivo estatal...*” (Alberto Binder -Derecho Procesal Penal- T. IV. Cap. XLII., Teoría del Proceso Composicional. La reparación del daño. Alcances y Significado. Bs. As. Editorial Ad Hoc, 2018 pag, 356)

XIII.- Que, aunado a ello, cabe señalar que en autos la oposición de la querella no es óbice para que proceda la aplicación al caso del instituto de la reparación integral, toda vez que el acuerdo de aquélla no constituye un requisito específico para la procedencia del mismo. El legislador al incorporar el instituto al Código Penal de la Nación, introdujo medios alternativos de solución de conflictos que pudieran reducir el *ius puniendi* estatal, orientando la legislación hacia soluciones reparatorias traducidas en herramientas de gestión que procuren la paz social, reduciendo la irracionalidad de la respuesta punitiva del estado. Abundante doctrina sostiene que la reparación integral consiste el cumplimiento unilateral por parte del imputado de las prestaciones relativas a la obligación de resarcir satisfactoriamente todas las consecuencias producidas de modo indebido por el hecho ilícito



4350819524275/04444202012231/4413340



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3
CPE 519/2019/TO2/1

que se le atribuye, mientras que la conciliación tiene la misma finalidad pero resulta de un acuerdo entre las partes.

Así, respecto de la reparación integral se ha sostenido que *“...no regula ningún tipo de obstáculo ni límites de procedencia, y, en cuanto a la conciliación, enumera delitos excluidos... pero en ninguno de los dos casos se fija un procedimiento especial, o algún otro requisito para su procedencia...”* (conf. fallo “VILLALOBOS” citado anteriormente).

En ese orden de ideas, entiendo que resulta aplicable este mecanismo de resolución alternativa del conflicto penal atento a los argumentos antes expuestos por las partes del proceso y toda vez que la solución propuesta supera el control de legalidad y lógica que debe analizar esta magistratura (conf. art. 69 del CPPN), viéndose con ello descartados los argumentos sostenidos por la parte querellante.

XIV.- En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por la Sra. Auxiliar Fiscal, corresponde hacer lugar a la solicitud efectuada en los términos del art. 59 inc. 6 del C.P. – según ley 27.147- y, en consecuencia, suspender la acción penal seguida contra **Ángel VÁZQUEZ y ANCERS. S.A.**, hasta tanto se abone la totalidad de las cuotas del plan de facilidades Nro. N807016 -60 cuotas-, bajo apercibimiento de reanudar el trámite del proceso y llevar a cabo el juicio respectivo, en caso de incumplimiento



43508195242775/04444202012231/4413340

A su vez, corresponde tener presente los pagos realizados por **Ángel VÁZQUEZ y ANCERS S.A.** en concepto de aportes con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales.

Consecuentemente, se deberá librar oficio a la Sección Penal de la División Técnico Jurídica de la Dirección Regional de los Recursos de la Seguridad Social Grandes Empleadores de la A.F.I.P., a fin de solicitar que informe de modo trimestral sobre el cumplimiento y estado del plan de facilidades mencionado, junto con copia de la presente y del desistimiento efectuado por el imputado a fs. 31, a sus efectos.

Finalmente, corresponde declarar abstracto el tratamiento del planteo efectuado por la defensa en los términos del art. 10 de la ley N° 27.541 (según ley N° 27.562) que diera lugar a la formación de la presente incidencia.

Por lo expuesto, el Tribunal;

RESUELVE:

I.- HACER LUGAR a la solicitud efectuada en los términos del art. 59 inc. 6 del C.P. –según ley 27.147- y, en consecuencia, **SUSPENDER** la acción penal seguida contra **Ángel VÁZQUEZ y ANCERS. S.A.**, cuyas demás condiciones personales obran en autos, en orden a la presunta comisión del delito previsto en el art. 9° de la ley N° 24.769, en relación a los hechos que surgen de los requerimientos de elevación a juicio obrantes a fs. 1055/1065 y 1394/1401, hasta tanto se abone la totalidad de las cuotas del plan de facilidades Nro. N807016 -60 cuotas-, bajo apercibimiento de



435081952427/5/04444202012231/4413340



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3
CPE 519/2019/TO2/1

reanudar el trámite del proceso y llevar a cabo el juicio respectivo, en caso de incumplimiento (art. 59 inc. 6 del Código Penal).

II.- TENER PRESENTE los pagos realizados en concepto de aportes con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales.

III.- LIBRAR oficio a la Sección Penal de la División Técnico Jurídica de la Dirección Regional de los Recursos de la Seguridad Social Grandes Empleadores de la A.F.I.P., a fin de solicitar que informe de modo trimestral sobre el cumplimiento y estado del plan de facilidades mencionado. Asimismo, remítase copia de la presente y del desistimiento efectuado por el imputado a fs. 31, a sus efectos.

IV.- DECLARAR ABSTRACTO el tratamiento del planteo efectuado por la defensa en los términos del art. 10 de la ley N° 27.541 (según ley N° 27.562) que diera lugar a la formación de la presente incidencia.

V.- SIN COSTAS (art. 530 del CPPN).

Regístrese y notifíquese.

KARINA ROSARIO PERILLI
JUEZ DE CÁMARA

Ante mí:

MARÍA CLARA DA ROCHA
SECRETARIA DE CÁMARA

En igual fecha se libraron cédulas electrónicas a la defensa técnica, al Ministerio Público Fiscal y a la Querella. CONSTE.-

MARÍA CLARA DA ROCHA
SECRETARIA DE CÁMARA



485081952427757044420201223174418340



435081952#2 / 5 / 04444202012231 / 4413340